

El pulso de 1976. Las movilizaciones de Tarragona en el contexto español

CRISTIAN FERRER GONZÁLEZ

Centre d'Estudis sobre Dictadures i Democràcies

Universitat Autònoma de Barcelona

Durante años se había explicado la oposición al franquismo desde su división orgánica, su debilidad política y su incapacidad estratégica para desarrollar modelos desde los que incidir en el devenir de la dictadura. Era un canon que provenía del análisis hecho a primeros de los años setenta por el reputado politólogo Juan José Linz, el cual entendía que el antifranquismo no tuvo capacidad para condicionar, dificultar o limitar la autonomía decisoria del régimen a lo largo de toda su andadura.¹ Sin embargo, estudios realizados en los últimos lustros han rechazado tales explicaciones y, contrariamente, demuestran cómo las movilizaciones populares impulsadas por el antifranquismo, junto a las divisiones en el seno de la clase dirigente que éstas agudizaron, fueron una de las causas fundamentales del final del franquismo y, a la sazón, de la democratización del sistema político. La historiografía del periodo ha logrado, así, explicar convenientemente los porqués del cambio de régimen y el final de la dictadura ofreciendo explicaciones multicausales que articulan los niveles de lo social, lo político y lo institucional.² Atrás han quedado concepciones que hasta no hace tanto

¹J.J. Linz: «Opposition to and under an Authoritarian Regimen: Spain», en R. Dahl (ed.): *Regimes and Oppositions*, Yale University Press, New Haven, 1973, pp. 182 y ss.

²Sin ánimo de exhaustividad, véase X. Domènech: «El cambio político (1962-1976): materiales para una perspectiva desde abajo», *Historia del Presente*, 1 (2002), pp. 46-67; P.Ysàs: *Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por su supervivencia, 1960-1975*, Crítica, Barcelona, 2004; Á. Soto: *¿Atado y bien atado? Institucionalización y crisis del franquismo*, Casa de Velázquez, Madrid, 2005; N. Sartorius y A. Sabio: *El final de la dictadura. La conquista de la democracia en España (noviembre de 1975 – junio de 1977)*, Temas de Hoy, Madrid, 2007; S. Cruz y J. Ponce (coords.): *El mundo del trabajo en la conquista de las libertades*, Universidad de Jaén, Jaén, 2011; C. Molinero y P.Ysàs: *La transición. Historia y relatos*, Siglo XXI, Madrid, 2018.

reducían los orígenes de la democracia bien a macro procesos de cambio estructural derivados de la modernización de la esfera económica, bien al papel exclusivo de las élites políticas del régimen y la colaboración de los dirigentes de la oposición, que gracias a su abandono de las pretensiones maximalistas de antaño, habrían hecho posible la reconciliación entre los españoles, prerrequisito de un futuro democrático.³

Estas últimas interpretaciones, ahora denominadas «clásicas», en las que el cambio político era explicado como producto de transformaciones estructurales o reducidas a la buena sintonía de las élites políticas generaba poderosas determinaciones. Si la transición fue obra de unos pocos individuos —varones, para más señas— y su desarrollo se decidió en despachos, ¿qué sentido tenía atender otros espacios de lo político? No era *ahí* donde se había desarrollado la Historia. Se desdeñaban las miradas que algunos historiadores comenzaron a dirigir a casos locales o regionales que, se decía, constituían excepciones no representativas del transcurso general que habría posibilitado el retorno de la democracia a España en un proceso carente de conflictividad o de intereses contrapuestos y sin las distorsiones que podía haber provocado la participación popular en él.⁴

La historiografía del mundo del trabajo se mantuvo, en general, ajena a los convencionalismos al uso sobre el cambio político. Sin embargo, las miradas que ésta empezó a ofrecer mostraban innumerables casos que no se ajustaban a las narrativas públicas sobre la transición. La «geografía de excepciones» que dibujaban casos como los de Vizcaya, Baix Llobregat, Navarra, Vigo, Ferrol, Madrid, Guipúzcoa, Sabadell o Vitoria, por citar sólo algunos de los que merecieron estudios monográficos, apuntaban a interrogantes tan pertinentes como necesarios.⁵

³J.M. Maravall: *La política de la Transición, 1975-1980*, Taurus, Madrid, 1981; G. O'Donell y P. Shmitt: *Transition from Authoritarian Rule*, John Hopkins University Press, Baltimore, 1986; J.F. Tezanos, R. Cotarelo y A. de Blas (eds.): *La Transición democrática española*, Sistema, Madrid, 1989; V. Palacio Atard: *Juan Carlos I y el advenimiento de la democracia*, Madrid, Espasa, 1989; C. Powell: *El Piloto del cambio. El rey, la monarquía y la transición a la democracia*, Planeta, Barcelona, 1991; S. Huntington: *La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX*, Paidós, Barcelona, 1994; S. Juliá: «Orígenes sociales de la democracia en España», *Ayer*, 15 (1994), pp. 165-188; J. Tusell: *Juan Carlos I. La restauración de la monarquía*, Temas de Hoy, Madrid, 1995; N. Towson: *Spain transformed. The Late Franco Dictatorship, 1959-1975*, University of Chicago Press, Chicago, 2007.

⁴J.C. Mainer y S. Juliá: *El aprendizaje de la libertad, 1973-1986*, Alianza, Madrid, 2000; M. Álvarez Tardío: *El camino a la democracia en España, 1931 y 1978*, Gota a Gota, 2005, Madrid, esta idea especialmente en las pp. 61-69.

⁵P. Ibarra: *El movimiento obrero en Vizcaya, 1967-1977. Ideología, organización y conflictividad*, Servicio Editorial UPV/EHU, Bilbao, 1987; S. Balfour: *La dictadura, los trabajadores y la ciudad. El movimiento obrero en el área metropolitana de Barcelona (1939-1988)*, Alfons el Magnànim, Valencia, 1994; J.V. Iriarte: *Movimiento obrero en Navarra (1967-1977). Organización y conflictividad*, Gobierno de Navarra, Pamplona, 1995; J. Gómez Alén: *As CCOO de Galicia e a conflictividade laboral durante o franquismo*, Xeiras, Vigo, 1995; J. Babiano: *Emigrantes, cronómetros y huelgas. Un estudio sobre el trabajo y los trabajadores durante el franquismo (Madrid, 1951-1977)*, Siglo XXI, Madrid, 1995; J.A. Pérez: *Los años del acero. La transformación del mundo laboral en el área industrial del Gran Bilbao (1958-1977). Trabajadores, convenios y conflictos*, Biblioteca Nueva, Madrid, 2001; X. Domènech: *Quan el carrer va deixar de ser seu. Moviment obrer, societat civil i canvi polític. Sabadell, 1966-1976*, Abadia de Montserrat,

Permitieron, al menos, empezar a plantearse si aquellas excepciones no devinieron más bien normas y si no eran de utilidad para comprender la transición a la democracia sin recorrer a unas siempre presuntas y nunca probadas buenas voluntades de quienes la habrían conducido. En su mayoría, aquellos trabajos no se planteaban propiamente la relación entre movilización social y cambio político, pero las evidencias que aportaban estaban allí y las preguntas seguían siendo pertinentes.

Es necesario recordar que el franquismo surgió como alternativa a la apertura democrática que significó el régimen republicano de 1931. Desde el punto de vista social, los años treinta habían establecido el marco propicio para reivindicaciones de justicia, igualdad y reconocimiento que la confabulación derechista consideraba necesario extirpar de raíz. El nuevo régimen se erigió, pues, en garante de una «paz social» sustentada en la negación del antagonismo de clase, sólo posible a través de un severo régimen disciplinario. Teniendo todo ello en consideración, la omnipresencia de la conflictividad social bajo el franquismo —esto es, del fracaso del régimen para erradicarla— ha abierto una visión interpretativa que vuelve comprensibles los vaivenes de la larga dictadura y, de este modo, uno de los paradigmas centrales para explicar tanto el origen como el final del franquismo es, precisamente, el análisis de la conflictividad social.⁶

Los primeros estudios cuantitativos sobre la conflictividad laboral bajo la dictadura, en tanto que ámbito preferente de acción del antifranquismo, destacaban las geografías urbanas e industriales como los epicentros fundamentales de la oposición.⁷ Fuera implícita o explícitamente, aquellos estudios dibujaron también los «límites» del cambio político asumiendo que en grandes zonas del país se impuso la desmovilización y la apatía política.⁸ Sin pretender negar un desarrollo desigual de la oposición ni su efecto sobre el cambio político, estudios recientes han mostrado cómo las geografías de la protesta y, por lo tanto, de desafío al régimen franquista, no se redujeron allí dónde ésta tuvo mayor intensidad desde un punto de vista cuantitativo. En lugares en los que aparentemente nada sucedía se han rescatado y revalorizado procesos de politización y movilización social que fueron capaces de erosionar los mecanismos de reproducción ideológica del régimen, desgastar a sus represen-

Barcelona, 2002; C. Carnicero: *La ciudad donde nunca pasa nada. Vitoria, 3 de marzo de 1976*, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2009.

⁶ Algunas reflexiones al respecto en C. Molinero y P.Ysàs: *Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista, Siglo XXI*, Madrid, 1998, pp. 32-36; M. Marín: *Història del franquisme a Catalunya*, Pagès/Eumo, Lleida, 2006, pp. 21 y ss.; más detalladamente en P.Ysàs: «La imposible “paz social”. El movimiento obrero y la dictadura franquista», *Historia del Presente*, 9 (2007), pp. 7-25; un análisis global desde esta perspectiva en X. Domènech: *Cambio político y movimiento obrero bajo el franquismo. Lucha de clases, dictadura y democracia (1939-1977)*, Icaria, Barcelona, 2012.

⁷ A destacar, las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya, Oviedo, Madrid y Barcelona, que fueron las más conflictivas a lo largo del franquismo. Véase, C. Molinero y P.Ysàs: *Productores...* cit., pp. 100-119.

⁸ Un ejemplo reciente en C. Molinero y P.Ysàs: *La transición...* cit., pp. 272-273.

tantes locales y, en general, extender entre el personal político del franquismo una sensación de cerco que contribuyó, qué duda cabe, al cambio democrático a nivel español.⁹ En general, emerge la necesidad de una explicación más compleja sobre los procesos de movilización en los espacios periféricos y, con ellos, replantearlos límites del cambio político mediante su inclusión en la ecuación. Unas respuestas que, sin duda, deben buscarse en los márgenes de la conflictividad y en aquellas zonas periféricas ausentes de los macro relatos sobre el cambio político desde abajo.

En este extremo, el caso de Tarragona deviene un prisma de observación de sumo interés. Análogo a otros espacios periféricos como Huelva, Ourense o Castelló, la provincia de Tarragona permaneció a la cola de las regiones más movilizadas del Estado durante buena parte de la dictadura, no suponiendo en ningún momento más del 1% de la conflictividad global española.¹⁰ Sin embargo, según datos recopilados por la Organización Sindical Española (OSE), la provincia de Tarragona llegó a protagonizar el 3,06% de las huelgas en 1976, el año de mayor conflictividad laboral de todo el franquismo.¹¹ Tarragona tuvo, en este sentido, un peso relativo en la conflictividad sociopolítica general y muy probablemente un papel menor en la disyuntiva clave que hizo inviable la dictadura más allá de la vida del dictador, que es a lo que se consagrará el presente artículo. Sin embargo, el caso de Tarragona, y muy particularmente el de su capital, aporta materiales relevantes para observar la crisis del franquismo desde espacios periféricos, en los que un emergente movimiento obrero de raíz antifranquista, junto con otros movimientos sociales, tuvieron la capacidad de deslegitimar la dictadura y de erosionar el poder del personal político local y provincial, hasta el punto de producirse diversos ceses y destituciones de

⁹ Al respeto, véase T. Ortega: *Del silencio a la protesta. Explotación, pobreza y conflictividad en una provincia andaluza. Granada, 1936-1977*, Universidad de Granada, Granada, 2003; Ó. Martín: *A tientas con la democracia. Movilización, actitudes y cambio en la provincia de Albacete, 1966-1976*, Catarata, Madrid, 2008. La historiografía sobre el mundo rural es la que, en la última década, más ha aportado sobre la materia. Véase, por ejemplo, A. Cabana: «¿Mientras dormían? Transición y aprendizaje político en el mundo rural», en Ó. Rodríguez Barreira (ed.): *El franquismo desde los márgenes. Campesinos, mujeres, delatores, menores...*, Edicions i Publicacions de la UdL, Lleida, 2013. Otros trabajados que no han tenido voluntad explícita de incidir en esta línea han aportado, igualmente, materiales de sumo interés, como el de A. Jarne: *L'oposició al franquisme a Lleida*, Pagès, Lleida, 1998; D. Lanero (ed.): *Por surcos y calles. Movilización social e identidades en Galicia y el País Vasco (1968-1980)*, Catarata, Madrid, 2013; de indudable interés es la obra colectiva dedicada, precisamente, al estudio de las rupturas y las permanencias en distintos entornos rurales editado por D. Lanero: *El disputado voto de los labriegos. Cambio, conflicto y continuidad política en la España rural (1968-1986)*, Comares, Granada, 2018 [en prensa].

¹⁰ Archivo Central del Ministerio de Trabajo (ACMT), «Informe sobre conflictos colectivos de trabajo», años 1966-1975.

¹¹ El cómputo proviene de cruzar las huelgas recogidas por la OSE de Tarragona en 1976, 48 huelgas, y cruzarlas con las 1.568 que contabilizó la OSE en España para aquel año. Datos base en C. Molinero y P.Ysàs: *Productores...* cit., p. 96 y Arxiu Històric Provincial de Tarragona (AHPT), Fondo de la Central Nacional de Sindicatos (CNS), caja 352, «Memoria de actividades», Secretariado de Asuntos sociales de la OSE de Tarragona, 1976.

cargos públicos. Igualmente, permite observar de cerca la dinámica huelguística en relación al contexto de expectativas ante el cambio y, a la vez, la situación de violencia política de gran intensidad y su incidencia sobre la movilización social.

LA COYUNTURA POLÍTICA EN TARRAGONA A LA MUERTE DE FRANCO

El último año de vida de Franco había supuesto una agudización extraordinaria de la movilización obrera en Tarragona. Desde 1973 la conflictividad laboral anual superaba con creces la del año anterior. Pero el salto dado en 1975 dejaba pequeñas todas las cifras previas. Si un año de grandes huelgas en la ciudad como lo fue 1974 se perdieron cerca de 20.000 horas de trabajo en conflictos laborales,¹² a la muerte del dictador éstas se habían multiplicado por más de doces, dejando un saldo de unas 250.000 horas no trabajadas. Sin embargo, el contexto de ebullición de 1976 dejó pequeños los índices de conflictividad anteriores y alcanzó más de 1.300.000 horas perdidas, sin contabilizar las producidas por la huelga general del 12 de noviembre, la mayor movilización desde la guerra civil, aunque en un contexto bastante distinto a las de primeros del año.¹³ Dicho de otro modo, en dos años la conflictividad obrera en Tarragona había incrementado al orden del 6.700%. Aquel espectacular aumento de la conflictividad tenía su propio correlato en mejoras salariales, que durante el trienio 1974-1976 crecieron de media tres veces más del que lo hizo la productividad, a menudo recortando la tasa de beneficio patronal.¹⁴

El antifranquismo tarraconense había tenido muchas dificultades para encontrar formas eficaces de oposición a la dictadura adaptadas a una realidad local en plena transformación, derivada de los planes industrialistas.¹⁵ La primacía comunista en el seno del antifranquismo hizo que la movilización social se erigiera en piedra angular de su modelo de oposición.¹⁶ Pero sus dificultades para encontrar canales de relación orgánica con el conjunto de la clase obrera a través de un sindicato vertical que se había revelado como impermeable a los activistas produjo un desarrollo organizativo desigual y un crecimiento al margen de las posibilida-

¹² En agosto de 1974 Tarragona se erigió en la segunda provincia en número de horas no trabajadas, por detrás de Barcelona, debido a la huelga de setenta días en una gran empresa de confección textil. Sobre aquel conflicto, véase C. Ferrer González: «Las batas rojas de Valmeline (Tarragona, 1974). Trabajadoras, huelguistas y referentes del movimiento obrero», *Historia del Presente*, 30 (2017), pp. 125-142.

¹³ AHPT, CNS, caja 352, «Memoria de actividades», Secretariado de Asuntos Sociales de la OSE de Tarragona, años 1974-1976. Sobre la huelga general del 12-N, véase J.M. Marín Arce: *Los sindicatos y la reconversión industrial durante la transición, 1976-1982*, Consejo Económico y Social, Madrid, 1997, pp. 42-58.

¹⁴ X. Domènech: *Cambio político...* cit., p. 203.

¹⁵ J. Llop: *La industrialització de Tarragona (1957-1971) i les seves circumstàncies*, Arola, Tarragona, 2002.

¹⁶ C. Molinero: «Una gran apuesta: la oposición política a través de la movilización social», en M. Bueno y S. Gálvez (coords.): «Nosotros los comunistas». *Memoria, identidad e historia social*, FIM, Madrid, 2009.

des legales de actuación en la CNS. No fue en los lugares de trabajo sino en los nuevos barrios al oeste de la ciudad donde el antifranquismo asentó sus bases de crecimiento, que sólo después empezaron a contar con presencia organizada en las fábricas que crecían a sus márgenes. Se conformaron núcleos de Comisiones Obreras (CCOO) en algunas grandes empresas, que no fueron funcionales antes de 1968, aunque formalmente contarían con una coordinadora local desde 1966.

Hasta finales de aquella década sólo las protestas vecinales tuvieron capacidad de desafiar al franquismo en el espacio público, mientras que la conflictividad laboral se reducía al interior de las fábricas. Éstas rara vez adquirirían forma de huelga en sentido estricto, por lo que no suelen aparecer en las estadísticas oficiales. Más bien eran paros parciales, negativas a hacer horas extraordinarias, increpaciones a los capataces o disminuciones del ritmo de trabajo. En 1969 el movimiento obrero dio un salto cualitativo que transformaría sus formas de acción colectiva. La huelga en la construcción de la central nuclear de Vandellós inauguró un nuevo modelo de conflictividad obrera, más disruptiva y que disputaba el control del espacio público a la dictadura.¹⁷ Si hasta 1972 el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) era la única organización política del antifranquismo tarraconense, junto a las secciones obreras de Acción Católica, a partir de entonces entraron en escena nuevas fuerzas políticas que tenían en los movimientos obrero y estudiantil —universitario desde que abriera la Delegación de la Universidad de Barcelona en 1971 y de bachilleres desde el conflicto contra la Ley General de Educación en 1972— su ámbito de actuación. El PSUC, de acuerdo con su línea política, intentó establecer alianzas con estos grupos. Pronto se revelaron sus dificultades, pues en su mayoría eran organizaciones que habían surgido como rechazo al modelo desarrollado por los comunistas.¹⁸

Por otra parte, en 1975 el espacio unitario del antifranquismo catalán, la Asamblea de Catalunya (AC), retomaba su actividad pública después de un par de años de cierta parálisis provocada por detenciones de entidad que padeció en 1973 y 1974.¹⁹ La AC agrupaba organizaciones políticas, movimientos sociales, personalidades independientes y entidades de la sociedad civil.²⁰ En su fundación habían participado diversos miembros de la oposición tarraconense en represen-

¹⁷ C. Ferrer González: *Sota els peus del franquisme. Conflictivitat social i oposició política a Tarragona, 1956-1977*, Arola, Tarragona, 2018, pp. 157-175.

¹⁸ Simplemente enumerar al Partido Comunista de España (internacional) y la Liga Comunista, cuya mayor presencia fue en el movimiento estudiantil, y el Topo Obrero y los Círculos Obreros Comunistas (que en 1974 pasaron a denominarse Organización de Izquierda Comunista de España), que desarrollaron fórmulas organizativas que rivalizaban con CCOO en el ámbito del movimiento obrero tarraconense.

¹⁹ A. Batista y J. Playà: *La gran conspiració. Crònica de l'Assemblea de Catalunya*, Empúries, Barcelona, 1991, pp. 57-68 y 183-193.

²⁰ Sobre la gestación de la AC, véase G. Pala: *El PSUC. L'antifranquisme i la política d'aliances a Catalunya (1956-1977)*, Base, Barcelona, 2011, pp. 97 y ss.

tación de las CCOO, las Comisiones de Barrio, las Comisiones Cívicas y, por supuesto, del PSUC,²¹ que no tardaron en formalizar una AC en Tarragona junto al Moviment Socialista de Catalunya (MSC), a mediados de 1972.²² En junio de 1975 el secretariado permanente de la AC había emitido un comunicado interno en el que instaba a todas las asambleas locales, comarcales y sectoriales a impulsar movilizaciones autónomas y descentralizadas que potenciasen «*vies naturals de relació*» con «*els Quatre Punts*» de la AC: el retorno de las libertades políticas y sindicales, la amnistía, la autonomía para Catalunya y el impulso de una lucha coordinada contra la dictadura a nivel español.²³ El 11 de diciembre de 1975, tras un par de años de atonía, la Asamblea de Tarragona también regresaba a la calle con manifestaciones ciudadanas en el marco de las huelgas impulsadas por CCOO,²⁴ una «acción [que] no tuvo repercusiones [laborales], constituyendo un fracaso. Sin embargo, la tensión existe, motivada por las limitaciones salariales y los incrementos de los precios», tal como reconocía la OSE de Tarragona.²⁵ Pocos días antes su delegado provincial recibía «un escrito firmado por unas 900 personas, en el que pedían descongelación salarial, amnistía y derechos humanos».²⁶ Era la Hora H del antifranquismo, el momento que debían producirse grandes huelgas y movilizaciones ciudadanas que pusieran de manifiesto el aislamiento social de la dictadura, y forzar la caída del régimen.

²¹ M. Duch y T. Carod: *Historia de Tarragona. República, dictadura i democràcia*, Pagès, Lleida, 2012, p. 252.

²² C. Ferrer González: *Sota...* cit, pp. 241 y ss.

²³ Archivo Histórico del Partido Comunista de España (AHPCE), Fondo Nacionalidades y Regiones (NR), Serie Catalunya, caja 64, carpeta 4, «Del secretariat de l'Assemblea de Catalunya a totes les assemblees locals, comarcals i sectorials», Documento interno no publicable, 30 de junio de 1975.

²⁴ «Declaración USO – Comisiones Obreras: no a las nuevas medidas económicas de Juan Carlos», *Luchas Obreras*, n.º. 79, 30 de noviembre de 1975; «Después de la muerte de Franco», Asamblea de Catalunya a Tarragona, 22 de noviembre de 1975, reproducida en P. Heras: *La oposición al franquismo en las comarcas de Tarragona (1939-1977)*, Mèdol, Tarragona, 1991, pp. 156-157.

²⁵ AHPT, CNS, caja 343, «Memoria mensual», OSE de Tarragona, 31 de diciembre de 1975.

²⁶ *Ibíd.*

UN CONTEXTO EN EBULLICIÓN

La abundancia de las movilizaciones obreras de 1976 desbordó las medidas de contención territorial que habían significado los convenios colectivos desde que se empezaran a aplicar en 1958 y que se generalizaran de 1962 en adelante.²⁷ Aunque la negociación colectiva había creado un marco en el que desarrollar la acción obrera, en realidad los convenios segmentaban las protestas y las contenían en las grandes empresas con reglamentación propia o en los ramos más bien organizados, que solían estar encuadrados en convenios de ámbito provincial.²⁸ Pero todo ello había saltado por los aires con el desarrollo de nuevos modelos de protesta y para 1976 las huelgas volvían a encadenarse y a extenderse de fábrica en fábrica, de localidad en localidad. Sin embargo, no en todos lados hubo la fuerza para que la mancha de aceite de la conflictividad obrera consiguiera arrastrar a empresas de diferentes sectores, o al menos no de una manera generalizada, aunque sí suficiente para que volviera la imagen de las huelgas en oleada de veinte años atrás.²⁹ En Tarragona la construcción había sido uno de los sectores que más pronto se había movilizó en contra de la dictadura y los que abrieron el camino hacia un nuevo modelo de conflictividad, más disruptiva y que disputaba el control del espacio público a la dictadura. A primeros de 1976 este sector desplazaría al químico como vanguardia del movimiento obrero tarraconense, en protagonizar la mayor acción colectiva jamás vista a la ciudad hasta la fecha, una huelga sectorial con pretensión a extenderse en paro general. Baste con señalar que el 90% de las horas perdidas de aquel año lo fueron de obreros de la construcción.³⁰

Ya a primeros de 1975 hasta 3.500 trabajadores de 67 empresas que construían la Refinería Enpetrol en la vecina Poble de Mafumet mantuvieron una huelga durante 12 días.³¹ Aquel era el sector que, junto con el químico, más había penetrado en las estructuras del sindicato vertical, pero que no rechazaban plantear negociaciones al margen y desbordarlo. Su atomización propició que pudieran desarrollarse en su seno diversos modelos de oposición, primordialmente el de CCOO pero también el que auspiciaban las Plataformas Anticapitalistas.³² Una memoria de la OSE de finales de 1975, destacaba: «En Construcción está extendiéndose el sistema de provocar huelgas, con las que consiguen los trabajadores

²⁷ C. Ferrer González: *Sota...* cit., pp. 106-110.

²⁸ S. Balfour: op. cit., pp. 82-85; J. Babiano: op. cit., pp. 55-56; C. Molinero y P. Ysàs: *Productores...* cit., pp. 62-70.

²⁹ X. Domènech: *Clase obrera, antifranquismo y cambio político. Pequeños grandes cambios, 1956-1969*, Catarata, Madrid, 2008, pp. 46-54.

³⁰ AHPT, CNS, caja 352, «Memoria de actividades», Secretariado de Asuntos Sociales de la OSE de Tarragona, 1976.

³¹ J.F. Mota: «*Mis manos, mi capital*». *Els treballadors de la construcció, les CCOO i l'organització de la protesta a la Gran Barcelona (1964-1978)*, Germania, Alcira, 2010, p. 90.

³² Sobre Plataformas Anticapitalistas, véase J. Sans: *Militancia, vida y revolución en los años 70: La experiencia de la Organización de Izquierda Comunista (OIC)*, Tesis doctoral inédita, Universitat Autònoma de Barcelona, 2017, pp. 130-154 y 225-240.

mejoras económicas al margen del Convenio». No les pasaba por alto que, «Generalmente estas acciones están dirigidas por destacados individuos de la oposición». ³³ Pese a los intentos de algunos obreros del PSUC que trabajaban en la Refinería de impulsar CCOO ahí, los intentos fueron baldíos. ³⁴ Las Plataformas Anticapitalistas habían conseguido erigirse como una organización sólida y desde las obras de la Refinería, un espacio alejado de la ciudad que concentraba el mayor número de trabajadores de la provincia, estarían en disposición de disputarle la hegemonía a CCOO en el seno del movimiento obrero los meses siguientes.

Las CCOO se habían visto reforzadas con el crecimiento de nuevas organizaciones de la izquierda radical en Tarragona, muy especialmente del Partido del Trabajo de España (PTE), que ya contaba con unos años de arraigo en la ciudad, y del Movimiento Comunista de Catalunya (MCC), que justo había empezado a organizarse a finales de 1975 de la mano de trabajadores de la Refinería. ³⁵ La creciente densidad organizativa opositora en la ciudad era muestra del dinamismo social que había quedado patente con el desbordamiento de las elecciones sindicales de 1975. Las planteadas en 1966 habían permitido una tímida presencia de activistas en el hermético sindicato vertical tarraconense, pero las CCOO se construirían mayoritariamente extramuros de la CNS. No fue hasta la renovación parcial de 1971, tras la anulación de las previstas en 1969, que el sindicato vertical de la ciudad empezó a ofrecer unas pocas posibilidades de utilizar los cauces legales al antifranquismo, al conseguir CCOO una penetración efectiva en los ramos, el químico y de la construcción. ³⁶

El contexto general en el que se celebraron las elecciones sindicales de 1975, junto con una mayor preparación y experiencia acumulada por parte de los partidos antifranquistas, hizo que numerosos miembros de la oposición consiguieran posiciones destacables en zonas donde hasta entonces la infiltración había sido dificultosa y, por ello, escasa. Pese a que Plataformas Anticapitalistas, que a aquellas alturas habían arraigado en algunas de las mayores empresas de la ciudad, propugnar un boicot activo a las elecciones, la participación a nivel provincial se acercó al 90% y se registró una renovación del 91,7% de los cargos sindicales. La misma OSE admitía: «La actividad de un número de estos Enlaces Sindicales, se empezó prontamente a sentir aportando un aire de innovación, concorde con el desarrollo

³³AHPT, CNS, caja 343, «Memoria mensual», OSE de Tarragona, 31 de diciembre de 1975.

³⁴Arxiu Històric de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (AHCONC), Colección de Biografías Obreras (CBO), entrevista a Ricardo Gil Gómez, 2001.

³⁵Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona (AHCT), Fondo Sonoro (FS), entrevista a Rafael Suanes Lara, 3 de octubre de 2007.

³⁶El resto de sectores se revelaron como prácticamente inexpugnables, más allá de unos pocos enlaces de fábrica, por lo que en 1972 CCOO organizó una coordinadora inter-ramos Química-Construcción en el seno de la OSE que en gran medida facilitó el arraigo del discurso de Plataformas Anticapitalistas contrario a la participación en el vertical en sectores como el metal, el textil, la madera y entre muchas empresas del atomizado sector de la construcción. Véase C. Ferrer González: *Sota...* cit., pp. 222-233.

político de nuestro país [...] En el ambiente sindical y laboral se ha empezado a percibir, propensión hacia el planteamiento de la huelga no regulada, tanto por motivos laborales como políticos», lideradas por trabajadores «que, al finalizar el año, se han lanzado a la campaña pro amnistía e implantación de los derechos políticos».³⁷ A diferencia de las anteriores, en aquellas elecciones sindicales los miembros de la oposición consiguieron notables resultados también en la segunda fase, celebrada durante el mes de octubre. Así, diversos militantes de CCOO obtuvieron puestos en la Unión de Técnicos y Trabajadores (UTT), tanto la local como la de ámbito provincial. El comunista Gonzalo Quirós sería elegido presidente de la UTT de la Construcción de la ciudad y Andrés Páez Hernández y Juan Sánchez García, ambos militantes de CCOO, consiguieron sendas vocalías provinciales del ramo.³⁸

Aquella posición le brindó a CCOO la oportunidad de realizar nutridas asambleas en los locales sindicales y extender sus consignas más allá de los trabajadores politizados. El aumento general de la conflictividad laboral y la mejor organización obrera permitía superar, en parte, la atomización propia de la construcción y plantear avances laborales de tipo colectivo. La difícil situación que atravesaba el sector, con tasas de paro que preocupaban incluso a las autoridades laborales,³⁹ no auguraban una negociación sencilla del convenio provincial e, igualmente, contribuían a la politización de muchos trabajadores, que en aquella coyuntura dieron muestras evidentes de estar dispuestos a movilizarse. La negociación había empezado el mes de marzo de 1975 y se alargaría hasta finales de agosto, avalada socialmente a través de los nuevos jurados de empresa elegidos en las elecciones de junio. El convenio colectivo de 1975, igual que el anterior de 1973, establecía un jornal diario fijo, y no por horas, e incluía una cláusula de actualización salarial revisable cada tres o cuatro meses, de acuerdo con el aumento de la inflación.⁴⁰ No era un mal convenio, pero cinco meses después los trabajadores de la construcción de la provincia de Tarragona iban a la huelga. ¿A qué se debía?

Des del 19 de enero de 1976 el Baix Llobregat estaba en pie de guerra. Por tercera vez en los últimos años la comarca obrera por antonomasia se encontraba totalmente parada por una huelga general que se alargaría hasta el día 29.⁴¹ El «o todos o ninguno» del conflicto de Laforsa de Cornellà⁴² se dejó oír más allá de la Gran Barcelona y, mientras el ramo de la construcción de aquella provincia se preparaba para la ne-

³⁷AHPT, CNS, caja 352, «Memoria de actividades», Secretariado de Asuntos Sociales de la OSE de Tarragona, 1975.

³⁸J.F. Mota: op. cit., pp. 99-100.

³⁹Véase AHPT, CNS, cajas 343-344, 1975-1976. Según datos de la OSE, cerca del 60% del paro registrado en la provincia procedía de obreros de la construcción.

⁴⁰AHPT, CNS, caja 341-B, «Informe mensual», OSE de Tarragona, septiembre de 1973; AHPT, CNS, caja 343, «Informe mensual», OSE de Tarragona, 31 de agosto de 1975.

⁴¹I. Riera y J. Botella: *El Baix Llobregat. 15 años de luchas obreras*, Blume, Barcelona, 1976, pp. 177 y ss.

⁴²Sobre aquel conflicto, véase E. Cerdán, M. González y S. Ródenas: *O tots o cap. Laforsa, una vaga que va fer història*, Tigre de Paper, Barcelona, 2015.

gociación del convenio provincial de 1976 y ya se auguraba el conflicto, las CCOO de Tarragona se plantearon extender la huelga des del Baix Llobregat hasta su ciudad. Según el testimonio de uno de los dirigentes locales de la construcción:

[...] a raíz de que hay grandes movilizaciones en el Baix Llobregat, hay una coordinación, yo era el coordinador junto con algún otro compañero que íbamos y nos turnábamos. Yo solía ir a Barcelona a [...] el Consell de la CONC, la Coordinadora de Comisiones Obreras a nivel de Catalunya. En una de las asambleas que se hicieron, la gente del Baix Llobregat llevaba tiempo en huelga, estaba casi todo el Baix Llobregat paralizado y querían que por diversos sitios... o saltaba, o aquello no se podía aguantar, una situación de resistencia y de grandes luchas.

A mí se me ocurre que aquí en Tarragona había posibilidades, al menos en la construcción, pues [para] hacer algo. En la construcción [...] hicimos algunas asambleas, hicimos una reunión la gente de Comisiones y del Partido [del PSUC] [...] y convinimos que aquí había condiciones para hacer algo, todavía no se tenía que negociar el convenio, pero pensamos que había que inventarse unas reivindicaciones: que se ganaba muy poco, pedir el doble de lo que ganábamos y plantear a la gente que había que ir a la huelga.⁴³

Aunque no se pueden tomar las palabras de José Estrada en su literalidad, lo cierto es que el convenio provincial de la construcción, que encuadraba a más de 22.000 trabajadores,⁴⁴ tenía vigencia hasta mediados de 1977 y la coincidencia temporal con la huelga general del Baix Llobregat, que además se dio en una coyuntura política excepcional, no podía ser azarosa. Las CCOO de la construcción de Tarragona habían empezado a elaborar una plataforma reivindicativa a través de asambleas de obra que después se proyectaba debatir en una asamblea plenaria en la CNS convocada por la UTT local de la construcción.⁴⁵ En inicio la plataforma simplemente pretendía recoger las inquietudes del sector. En ella se reivindicaban reducción de jornadas e incrementos salariales, acabar con la elevada eventualidad de las plantillas y que fueran los propios obreros quienes gestionaran la seguridad, así como la eliminación de las listas negras que circulaban por las empresas con trabajadores conflictivos. Fue la concomitancia con la situación en el Baix Llobregat lo que precipitó los acontecimientos. Según recogía la OSE el última día de enero, a «finales de mes se pudo comprobar que por la UTT de la Construcción se preparaba un conflicto general, a estos efectos celebraron una Asamblea autorizada de Trabajadores».⁴⁶ Los más de quinientos obreros de la ciudad que participaron el día 26 en la asamblea en el sindicato vertical ratificaron

⁴³ AHCT, FS, entrevista a José Estrada Cruz, 7 de febrero de 2008.

⁴⁴ AHPT, CNS, caja 352, «Copia memoria 1976», Secretariado Provincial de Asuntos sociales de la OSE de Tarragona, marzo de 1977, p. 36.

⁴⁵ *Diario Español*, 10 de enero de 1976.

⁴⁶ AHPT, CNS, caja 344, «Memoria mensual», OSE de Tarragona, enero de 1976.

la plataforma reivindicativa elaborada por CCOO y amenazaron con ir a la huelga general en caso de que la patronal no accediera a su inmediato cumplimiento.⁴⁷

El ambiente político estaba en pleno éxtasis. Los obreros de la construcción de Tarragona eran conscientes que había más posibilidades de conseguir sus objetivos si vinculaban las reivindicaciones particulares del sector con el clima de movilización general del país. El día antes de la gran asamblea en la CNS, en la que se decidió ir a la huelga, la intercomarcal del Camp de Tarragona de la AC había convocado una manifestación pro-amnistía en Valls, que acabó con cargas policiales, detenciones y concurrentes hospitalizados.⁴⁸ Una acción que no había pasado desapercibida por el movimiento obrero de la ciudad. Estaba previsto que pronto se diera inicio a la negociación de los convenios de la construcción en algunas de la provincias más conflictivas de España, como Valencia, Sevilla y Barcelona, junto con muchas otras como Córdoba, Badajoz o Girona, que también acabarían protagonizando dilatadas huelgas en el sector.⁴⁹ Además, la experiencia reciente de la huelga de la construcción en Madrid, que se había zanjado días antes con incrementos salariales del 40%, muy por encima del 17% fijado como tope por el gobierno, no dejaba de ser un aliciente para aquellas movilizaciones.⁵⁰

Y es que aquel mes de enero el país se vio asolado por conflictos de enorme intensidad: el metro de Madrid había sido militarizado para evitar el paro, los funcionarios de Barcelona estaban en huelga, como también lo estaban los empleados de Correos, Standard o los bomberos y, en aquel camino, numerosas localidades por doquier del territorio se encontraban en situaciones cercanas a la huelga general. Parecían estarse cumpliendo las condiciones para cometer la huelga nacional que propugnaban los comunistas, que desde hacía un par de años habían teorizado como Acción Democrática Nacional, la cual preveía el encadenamiento de conflictos hasta llegar a una gran huelga general que hiciese colapsar el franquismo.⁵¹ En un plano más particular, los trabajadores partían de la convicción que la mejor manera de solidarizarse con los conflictos en marcha era que éstos se extendieran, comenzando, en el caso que nos atañe, por Tarragona. En la memoria del mes de enero de la OSE se destacaba que «el sector metalúrgico se inicia cierta tensión de posibles

⁴⁷ «Planteamiento reivindicativo de los trabajadores del Sindicato de la Construcción», *Diario Español*, 27 de enero de 1976.

⁴⁸ A. Mayayo: *La ruptura catalana. Les elecciones del 15-J de 1977*, Afers, Catarroja, 2002, pp. 21-22. Sobre las movilizaciones por la amnistía de aquel momento, véase D. Ballester y M. Risques: *Temps d'amnistia. Les manifestacions de l'1 i el 8 de febrer de 1976 a Barcelona*, Edicions 62, Barcelona, 2001.

⁴⁹ Sobre la huelga de Córdoba, véase R. Morales Ruiz: *Transición política y conflicto social: la huelga de la construcción de Córdoba en 1976*, Ayuntamiento de Córdoba, Córdoba, 1999.

⁵⁰ Véase V. Díaz Cardiel, et. al.: *Madrid en huelga, enero de 1976*, Ayuso, Madrid, 1976. Un análisis crítico a la panorámica anterior en J. Babiano: op. cit., pp. 318 y ss.

⁵¹ E. Treglia: *Fuera de las catacumbas. La política del PCE en el movimiento obrero*, Eneida, Madrid, 2012, pp. 311 y ss.

solidaridades».⁵² Igualmente, en paralelo al conflicto de la construcción, otros sectores de la ciudad protagonizaron paros, como FECSA, Standard o Telefónica. Fue en el contexto que los obreros de la construcción abrieron que centenares de maestros empezaron también a plantear las demandas del sector en asambleas en la CNS, que a finales de febrero realizarían su primera huelga en Tarragona, una acción que daría el pistoletazo de salida al movimiento de profesores no numerarios en la ciudad.⁵³

A LA HUELGA

El 27 de enero de 1976 la mayoría de obras de la ciudad amanecieron sin que los trabajadores acudieran a ellas. El día anterior la decisión de ir a la huelga había sido ratificada en una nueva asamblea en la CNS en la que se sumó todo el ramo de la construcción de la comarca del Tarragonès.⁵⁴ Los verticalistas no tardaron en notificar sobre la irregularidad del paro, que «presupone infracción a la legalidad vigente».⁵⁵ De inmediato, el conflicto motivó la protesta de diversas plantillas que estaban encuadradas en otros ramos aparte de la construcción, muy especialmente del metal y la química. En la empresa de montajes Ibemo, donde las Plataformas Anticapitalistas eran mayoritarias, se aprobó ir a la huelga por solidaridad. No era un hecho sorprendente, pues sus cerca de 800 trabajadores estaban diariamente en contacto con muchos de los huelguistas, al estar construyendo conjuntamente la Refinería Enpetrol. Aunque poco después retomaron el trabajo, el despido de cuatro obreros como represalia hizo que Ibemo volviera a la huelga.⁵⁶ También numerosas empresas químicas, que en los últimos años se habían erigido como la vanguardia indiscutible del movimiento obrero de la ciudad, empezaron a plantear conflictos. Las CCOO eran preponderantes en todo el sector y su capacidad de movilización no tenía parangón con otros ramos. Conscientes de ello, la patronal química no dudó en cumplir las reivindicaciones particulares de los trabajadores con las que se amparaba la protesta, con la finalidad de desactivar unos paros que resultaba evidente su componente de solidaridad: «Se ha logrado la estabilidad laboral en el sector petroquímico por la concesión de mejoras retributivas otorgadas por las diversas empresas del sector».⁵⁷

En cuanto a los huelguistas de la construcción, a diario se celebraban asambleas masivas en la ciudad sindical de Tarragona, que por la tarde se convertían en ma-

⁵² AHPT, CNS, caja 344, «Memoria mensual», OSE de Tarragona, enero de 1976.

⁵³ «Piden gestión democrática en las Universidades Laborales», *El Correo Catalán*, 27 de marzo de 1976.

⁵⁴ «Paro casi general en la construcción», *Diario Español*, 28 de enero de 1976.

⁵⁵ «Ayer continuó el paro en la construcción», *Diario Español*, 29 de enero de 1976.

⁵⁶ «Paro en IBEMO», *Diario Español*, 5 de febrero de 1976.

⁵⁷ AHPT, CNS, caja 344, «Memoria mensual», OSE de Tarragona, febrero de 1976.

nifestaciones de miles de trabajadores por la Rambla Nova,⁵⁸ el teatro en el que se escenificaban las protestas y en donde se disputó en el plano simbólico el control por el espacio público entre la oposición y la dictadura. Los obreros de la construcción recibieron el apoyo entusiasta de personas ajenas al conflicto durante las manifestaciones, muy especialmente de los estudiantes universitarios y de enseñanza media, los cuales solían lucir «carteles de solidaridad hacia los trabajadores de la Construcción, invitando a participar en su manifestación».⁵⁹ Santiago Álvarez Abellán, presidente del Consejo Nacional de Trabajadores, declaró en Radio Nacional que «en la situación conflictiva del sector de la Construcción no hay ningún aspecto político».⁶⁰ Sin embargo, la huelga resultaba difícilmente separable del contexto general de movilizaciones por la democracia. Así, el 1 de febrero pudieron verse huelguistas tarraconenses en la manifestación por la amnistía convocada por la AC en Barcelona, donde se desplazaron junto con numerosos estudiantes de la Universidad Laboral.⁶¹

El pulso entre los sectores en huelga y la patronal, que contó con el apoyo unívoco de los aparatos del régimen, se mantuvo incólume durante siete días, hasta que el 3 de febrero la prensa atisbaba una cercana resolución del conflicto.⁶² Los medios destacaban que, después de asambleas conjuntas en la CNS entre obreros y empresarios, «existen moderados indicios de optimismo de que los problemas conflictivos del sector puedan resolverse y se vuelva a la normalidad».⁶³ La expectativa de un final próximo obligó a moderar la actuación policial, que a diferencia de las pasadas jornadas, no se excedió durante aquellos días. Según recogía Europa Press, la policía había retirado pancartas pero sin forzar incidentes. Pese a algunas concesiones patronales, las asambleas obreras desestimaron el entendimiento con los empresarios, pues éstos exigían la vuelta al trabajo como paso indispensable antes de sellar ningún acuerdo.⁶⁴

Encalladas las posiciones, la huelga llegó a un punto muerto. Si en un inicio eran unos 5.000 los obreros en paro, según publicara la prensa,⁶⁵ para el 6 de febrero se había doblado el número de huelguistas y el conflicto incluía empresas de diversos sectores económicos.⁶⁶ Pese a las dificultades por cuantificar la acción huelguística, tanto por lo que se refiere al sesgo en las cifras de seguimiento como por las dificultades

⁵⁸ «Sigue el paro en la construcción», *Diario Español*, 30 de enero de 1976; «Otra vez se manifestaron los obreros», *Diario Español*, 1 de febrero de 1976.

⁵⁹ «Prosigue el paro en la construcción», *Diario Español*, 31 de enero de 1976.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ P. Heras: *op. cit.*, p. 196.

⁶² «Posibilidades de acuerdo», *Diario Español*, 3 de febrero de 1976.

⁶³ Archivo General de la Administración (AGA), Fondo Ministerio de Información y Turismo (MIT), caja 42, legajo 9112, carpeta 14, «Continúan en paro los trabajadores de la construcción de Tarragona, unos cinco mil en total», Europa Press, 3 de febrero de 1976.

⁶⁴ «Continúa el paro en el sector de la construcción», *Diario Español*, 4 de febrero de 1976.

⁶⁵ A diferencia de lo que ocurre con la serie 1973-1975, en el AHPT no se conservan completas las memorias mensuales elaboradas por la OSE en 1976. Ello impide hacer un rastreo más sistemático de los hechos acaecidos aquel año, incluido el seguimiento obrero de la huelga.

⁶⁶ «Más de 10.000 productores en paro», *Diario Español*, 6 de febrero de 1976.

de establecer el número total de trabajadores en un sector de alta temporalidad como la construcción, la intensidad de las protestas hace que merezca la pena el ejercicio. Según datos a 31 de diciembre de 1975, en la ciudad de Tarragona había 5.870 trabajadores de la construcción, 3.464 de los cuales constaban como eventuales. A nivel comarcal el total se situaba en 9.315, con solamente 3.835 trabajadores fijos.⁶⁷ Ello arroja unos índices de participación, aun asumiendo el caso improbable que las cifras publicadas por el diario provincial del Movimiento estuvieran infladas, elevadísimos. Si unos 5.000 obreros de la ciudad habían estado en huelga durante los primeros días del conflicto, ello daría cifras por encima del 85% de seguimiento, que a nivel comarcal superarían con creces el 90%.

Tales números, si bien reforzaban a los huelguistas y sus razones en el plano moral, también les situaban ante una difícil encrucijada. Tras más de diez días de conflicto era difícil que pudieran movilizarse más fuerzas en el sector de la construcción. Los empresarios, por su parte, amenazaban con un cierre patronal,⁶⁸ al tiempo que grupos violentos de extrema derecha empezaron a atezar a los huelguistas y a todos aquellos que les daban apoyo. En casa del profesor Pedro Heras, a la sazón responsable de organización del PSUC de Tarragona, aparecieron pintadas intimidatorias en las que se leía: «Piquetes No. Democracia», firmadas por una fantasmagórica Asociación Democrática de Trabajadores.⁶⁹ Los paros en solidaridad fueron extensos en dos de los sectores que más se habían movilizado en los últimos años, el químico y el del metal. El *Diario Español* hizo lo propio y se esforzó por acabar con la solidaridad, instrumentalizando la imagen de los piquetes informativos que diariamente recorrían la ciudad, atribuyéndoles coacciones y violencias contra los albañiles que querían regresar a la obra: «hay un buen número de trabajadores que desean volver a sus trabajos, pero que no lo hacen por solidaridad o por temor a alguna represalia»,⁷⁰ como si la solidaridad y la coacción fueran de algún modo equiparables. Pero al igual que en otras ocasiones sólo había sido posible amedrentar a la patronal con el desborde del conflicto,⁷¹ los huelguistas de la construcción se encontraban ante la disyuntiva entre tratar de extender la huelga o perderla. Las miradas estaban puestas en Tabacalera, que con una plantilla que superaba las 800 personas, era la mayor empresa de la ciudad. La Organización de Izquierda Comunista de España (OICE), fuerza principal en Plataformas Anticapitalistas, había conseguido ahí un gran arraigo y creía posible sumarla a la huelga.

La mañana del 10 de febrero los huelguistas volvieron a reunirse en la CNS para discutir las acciones del día. Mariano Causada, uno de los dirigentes de la OICE,

⁶⁷ J. Margalef: *El Tarragonès. Estructura económica, expansió industrial i desequilibris sectorials*, Caixa d'Estalvis de Catalunya, Barcelona, 1979, p. 198.

⁶⁸ *Diario Español*, portada, 7 de febrero de 1976.

⁶⁹ P. Heras: op. cit., p. 197.

⁷⁰ «El difícil conflicto de la construcción», *Diario Español*, 5 de febrero de 1976.

⁷¹ C. Ferrer González: «Las batas rojas...», cit., p. 134.

defendió con ahínco arrastrar a la huelga a empresas de otros ramos, con el fin de desbordar el paro en la construcción. «La verdad es que yo no lo veía claro aquello, lo que pasa es que nos sentimos arrastrados porque sabíamos que algo teníamos que hacer», según rememoraba uno de los dirigentes locales de CCOO.⁷² De camino al polígono industrial, diversos piquetes intentaron que las trabajadoras de Tabacalera se sumaran a la marcha, hecho que provocó una violenta intervención policial.⁷³ Aunque el extremo no queda claro, no puede descartarse que la policía armada hubiera actuado sin necesidad de ninguna incitación particular, pues el enfrentamiento coincide en el tiempo con la radicalización de la patronal contra los huelguistas. Según la prensa legal, los trabajadores en huelga habrían respondido con piedras a la carga policial. En consecuencia, el millar de huelguistas presentes se disgregaron por diversas calles de la ciudad, donde habrían continuado los enfrentamientos; unos altercados callejeros que fueron respondidos por las fuerzas del orden con balas de goma y bombas de humo, unos métodos nunca antes utilizados en la ciudad y que contaron con el apoyo de contingentes policiales desplazados desde Lleida para la ocasión. En aquel momento fueron detenidos diversos huelguistas, tras lo que un copioso grupo de trabajadores se dirigieron a la Rambla Nova, donde los obreros de Ibemo acababan de llegar desde la Refinería. En una nueva carga policial José Estrada, considerado tanto por la patronal como por el régimen uno de los dirigentes de la huelga, sería arrestado por la policía. Las detenciones de la mañana propiciaron una nueva manifestación de rechazo contra la violencia policial por la tarde. Una sexagenaria militante del PSUC tuvo que ser hospitalizada por los golpes recibidos por la policía armada aquella tarde.⁷⁴ En total fueron doce los huelguistas arrestados en el transcurso de las protestas, pasando siete de ellos a disposición judicial.⁷⁵

Después de catorce días de huelga, no se preveía un desenlace propicio al conflicto. La libertad de los encarcelados se convirtió, entonces, en la prioridad de CCOO. Si se evitaba el enjuiciamiento de los huelguistas arrestados, pensaban, aún se podría evitar el descalabro. Dos abogados de la oposición se reunieron con un miembro de la patronal con el fin de convencerle de negociar una salida razonada a la huelga, que ninguna de las dos partes quería que se convirtiera en una

⁷² AHCT, FS, entrevista a José Estrada Cruz, 7 de febrero de 2008.

⁷³ Pedro Heras, una persona que no fue ajena a los hechos en tanto que responsable político del PSUC de Tarragona por aquellas fechas, dio a entender que CCOO participó plenamente en las pretensiones de extender la huelga, cuando explica en su libro: «La dirección hegemónica en la huelga la ejerció CCOO, y dentro de los líderes que se destacaron en las asambleas y debates José Estrada tuvo una especial relevancia. Estrada fue encarcelado por participar en piquetes que pretendían extender la huelga al polígono industrial». P. Heras: op. cit., p. 147. Otros testimonios de los hechos, sin embargo, reducen la iniciativa a militantes de Plataformas Anticapitalistas. AHCONC, CBO, entrevista a Juan Aragón Crespillo, 2001. A mi entender, éste último es un relato construido a posteriori que buscaba quitarse las culpas del descalabro de la huelga a partir de aquel punto.

⁷⁴ P. Heras: op. cit., p. 197.

⁷⁵ «Violentas manifestaciones», *Diario Español*, 11 de febrero de 1976.

nueva Granada.⁷⁶ Los tres pidieron reunirse con Estrada en la cárcel para negociar el final de la huelga, negociaciones en las que el dirigente de CCOO estableció una serie de condiciones mínimas para que la organización planteara la vuelta al trabajo.⁷⁷ La patronal se comprometió a hacer desaparecer las listas negras y a no aplicar sanción alguna contra los huelguistas, así como aplicar, de inmediato, un plus salarial según la carestía de la vida en el marco del convenio de 1975. Si bien se perdían las jornadas no trabajadas, la patronal se comprometía a negociar un nuevo convenio colectivo a partir de aquel mes de mayo y no tener que esperar hasta agosto de 1977, fecha en el que vencía el que estaba vigente.⁷⁸ Estrada publicó una carta que se leyó en una asamblea obrera en la CNS, en la que decía:

No dudo que muchos de vosotros estáis dispuestos a seguir la huelga hasta donde sea necesario, pero creo que la mejor arma que hemos tenido es la unidad de todos los trabajadores. Si permanecemos unidos, en un mañana próximo, podremos conseguir todas nuestras reivindicaciones.

Como siempre, yo me someto a la decisión de los trabajadores reunidos en asamblea, pero quiero hacer constar que, si la patronal acepta el acuerdo en los términos fijados por la comisión negociadora nombrada por nosotros, mi voto es favorable a la reincorporación al trabajo y a dicho acuerdo.⁷⁹

Ciertamente, era un retroceso en comparación con lo que se pedía, pero la apertura de nuevas negociaciones a partir del mes de mayo debían permitir volver a plantear ahí las reivindicaciones no conseguidas durante aquellas intensas semanas y, más importante aún, hacerlo desde una posición favorable a los huelguistas, con la salida del aparente callejón sin salida en el que se encontraba la huelga. El acuerdo fue ratificado el 12 de febrero en una masiva asamblea obrera de ámbito comarcal en el CNS. Por un 62% de los votos los trabajadores de la construcción de la comarca apostaban por volver al trabajo, mientras que los contrarios al pacto consiguieron aglutinar al 30% de los implicados, registrándose un 8% de votos en blanco.⁸⁰ Equivalente compromiso adquirieron los empresarios y trabajadores del Baix Camp, dos días después.⁸¹ Al día

⁷⁶ Aquella experiencia había quedado marcada a fuego en el movimiento obrero tarraconense cuando tres obreros fueron represaliados, con fuertes torturas incluidas, durante las protestas por la muerte de tres trabajadores de la construcción en la huelga de 1970 en Granada. Sobre aquella huelga, véase E. Tudela Vázquez: *Nuestro pan. La huelga del 70*, Comares, Granada, 2010, pp. 193 y ss. Sobre las movilizaciones en solidaridad con Granada en Tarragona y sus consecuencias en el movimiento obrero, véase C. Ferrer González: *Sota...* op. cit., pp. 215 y ss.

⁷⁷ «Solucionada la crisis de la construcción», *La Vanguardia Española*, 14 de febrero de 1976. AHCT, FS, entrevista a José Estrada Cruz, 7 de febrero de 2008.

⁷⁸ «Sindicato Provincial de la Construcción: Unión de Empresarios», *Diario Español*, 13 de febrero de 1976.

⁷⁹ Carta de José Estrada desde la cárcel a sus compañeros de la construcción en huelga, s.f., reproducida en P. Heras: op. cit., pp. 147-148.

⁸⁰ «El conflicto de la construcción en Tarragona quedó resuelto», *Diario Español*, 13 de febrero de 1976.

⁸¹ «Terminó el paro en la construcción en Reus», *Diario Español*, 15 de febrero de 1976.

siguiente del acuerdo se creó una comisión para solicitar la excarcelación de Estrada, que había pasado a disposición del Tribunal de Orden Público, y el día 16 era puesto en libertad condicional, tras abonar las 125.000 pesetas impuestas como fianza.⁸²

La vuelta al trabajo, iniciada el 14 de febrero, fue muy extraña. El PSUC leyó el pacto como una «muestra de cómo se pueden llegar a acuerdos políticos interclasistas en medio de un enfrentamiento económico entre obreros y patronos», mientras celebraba los incrementos salariales que se habían obtenido.⁸³ Des del principio, sin embargo, surgieron casos como el de la Refinería, dónde tras un breve lapso temporal despidieron a 45 obreros.⁸⁴ Trabajadores de algunas empresas, como la metalúrgica Ibemo, optaron por no regresar al trabajo, amparándose en los resultados de la votación entre la propia plantilla. Aislados, todos los huelguistas serían despedidos.⁸⁵ Por su lado, la Asamblea de Tarragona había convocado movilizaciones el mismo 14 de febrero para visualizar que el pulso de la oposición contra el régimen continuaba pese a regreso al trabajo, mientras que tan sólo tres días después estallaba la huelga de la construcción en la provincia de Barcelona.⁸⁶

En aquel contexto de grandes movilizaciones generales, muchos huelguistas encuadrados en Plataformas Anticapitalistas prosiguieron con acciones en diversas empresas, al margen de lo decidido por el conjunto de los trabajadores en la CNS. De acuerdo con el resultado de las votaciones del día 12 de febrero, hasta el 38% de los trabajadores de la comarca no estaban satisfechos con el pacto negociado. Si bien éste había sido ratificado por la asamblea obrera por cerca de dos tercios de los votos, su incumplimiento sistemático por parte de la patronal propició el reforzamiento de las posiciones sostenidas por Plataformas Anticapitalistas y la OICE, a las que se sumaron las críticas de otras organizaciones como el Topo Obrero, el MCC y el PTE, que utilizaron la situación para cargar contra los «reformistas» del PSUC y de CCOO. Si bien sus posicionamientos habían sido los hegemónicos en el movimiento obrero, en aquella coyuntura particular se vieron claramente sobrepasados por el conjunto de la izquierda radical. La situación entre las dos grandes tendencias del movimiento obrero tarraconense —CCOO y Plataformas— se tensó al extremo y de la colaboración durante la huelga se pasó a la confrontación a partir de la asamblea en la que se decidió la vuelta al trabajo. La máxima de Plataformas Anticapitalistas sintetizaba perfectamente su actitud hacia las CCOO en aquel momento: «el reformismo a un lado, la lucha obrera a otro y en contra».⁸⁷ Las últimas semanas

⁸² «Se empezó a trabajar», *Diario Español*, 14 de febrero de 1976; AGA, MIT, caja 42, legajo 9112, carpeta 15, «Presunto activista en libertad bajo fianza», Pyresa, 16 de febrero de 1976.

⁸³ «16 dies de vaga», *Treball*, n.º. 435, 16 de febrero de 1976; «La Construcció trenca el sostre salarial», *Treball*, n.º. 436, 1 de marzo de 1976. Cita original en catalán.

⁸⁴ «Productores despedidos», *Diario Español*, 15 de febrero de 1976.

⁸⁵ «Sigue el paro en la empresa IBEMO», *Diario Español*, 18 de febrero de 1976.

⁸⁶ P. Heras: op. cit., p. 198; J.F. Mota: op. cit., pp. 102-116.

⁸⁷ *Lucha Obrera*, n.º. 5, enero de 1975.

de febrero de 1976 la tensión socio-laboral fue en aumento, tal como recogía la memoria mensual de la OSE: «Existe normalidad en todas las actividades, aunque en los últimos días del mes se viene observando una tendencia a la creación de conflictividades, posiblemente preparatorios de intentos de actividad política». ⁸⁸ Parecía claro que la situación estaba lejos de haber regresado a la normalidad.

EL FINAL DE LA HUELGA, PERO NO DEL CONFLICTO

En aquel ambiente enrarecido, en el que la patronal ignoró completamente el pacto alcanzado y en el que algunas de las mayores plantillas de la construcción seguían en situación de paro o al borde del conflicto abierto, la policía procedió a detener nuevamente a José Estrada, acusado de «formar piquetes con la intención de coaccionar a los obreros de las empresas de la construcción de la comarca tarraconense, llegándose como consecuencia a la huelga general». ⁸⁹ Era un claro mensaje de que las autoridades locales no iban a permitir que Tarragona se convirtiera en otro Sabadell, donde una huelga general de seis días le había costado la alcaldía a Josep Burrull, ⁹⁰ por lo que su actuación se endureció aún más si cabe a partir de entonces.

Poco después de la detención de Estrada y en medio de aquella anómala situación, se produjeron los hechos de Vitoria del 3 de marzo, cuando cinco obreros habían sido abatidos por la policía armada en el contexto de una nueva huelga general a nivel local. ⁹¹ Las protestas y paros en solidaridad con Vitoria recorrieron toda la península ibérica, en unas jornadas en las que diversos trabajadores fallecerían en choques con la fuerza pública, entre ellos uno en Tarragona. Las agencias informativas recibían los detalles en cuentagotas. En un primer momento la información era que el joven estaba «gravísimamente herido», y se ponía en un segundo plano que «fuentes del hospital» le daban por «clínicamente muerto». ⁹² Sólo trascendió que el joven se había precipitado desde una terraza mientras que en la ciudad se estaban produciendo incidentes entre manifestantes y policías. Poco después, las agencias recibían la correspondiente información policial para redondear convenientemente la noticia. Se aportaban nuevos detalles como que el joven estaba participando en la manifestación —cosa que no se dijo en un primer momento— y que cayó desde un terrado des de la calle Her-

⁸⁸ AHPT, CNS, caja 344, «Memoria mensual», OSE de Tarragona, febrero de 1976.

⁸⁹ AGA, MIT, caja 42, legajo 9112, carpeta 14, «Procesado activista obrero», Cifra, 2 de marzo de 1976.

⁹⁰ X. Domènech: *Quan el carrer...* cit., pp. 276–290.

⁹¹ C. Carnicero: op. cit.

⁹² AGA, MIT, caja 42, legajo 9112, carpeta 14, «Una persona resultó gravísimamente herida en los incidentes ocurridos esta tarde en Tarragona», Europa Press, 5 de marzo de 1976.

mano Landa, desde dónde presuntamente estaba «tirando piedras sobre los efectivos policiales, mientras éstos procedían a disolver a los manifestantes».⁹³

Todo había empezado a media mañana del viernes 5 de marzo en el polígono industrial donde se estaba construyendo la Refinería Enpetrol, en al Poble de Mafumet. Durante la hora del bocadillo un grupo de trabajadores de Ibemopro pusieron realizar una asamblea de todas las empresas del polígono. Como era habitual entre las obras de la construcción, largas filas de obreros recorrían otros tajos, pidiendo a sus trabajadores que se reunieran para informar de lo sucedido. Miles de ellos se reunieron en asamblea para discutir sobre los sucesos de dos días antes en Vitoria. Tomaron la decisión de dejar el trabajo y marchar hacia la ciudad en señal de duelo y rechazo ante la violencia policial en la capital alabesa. Eran poco más de diez los kilómetros que debían recorrer hasta la Rambla Nova. Según declaraciones del Gobierno Civil, «en actitud levantisca portando algunos de ellos palos y barras», unos 1.200 trabajadores —entre dos y tres mil, según otras fuentes— consiguieron llegar al cruce entre las avenidas de Andorra y Catalunya, punto en el que «fueron invitados a disolverse por la Fuerza Pública». Los manifestantes, siempre según la versión difundida a posteriori por las autoridades, hicieron caso omiso al requerimiento y atacaron «con piedras a los Agentes del Orden que se vieron obligados a actuar para dispersarlos».⁹⁴

Aquellas primeras cargas policiales no consiguieron romper el grueso de la columna de trabajadores, la mayoría de los cuales siguieron avanzando, produciéndose nuevos choques con la policía por todo el ensanche. En las inmediaciones de la Rambla Nova grupos de manifestantes levantaron barricadas con automóviles, contenedores de basura y material de obras, impidiendo así el paso de tráfico rodado.⁹⁵ Según informó el Gobierno Civil, de un modo muy conveniente para justificar lo que sucedería después, algunos de los manifestantes empezaron entonces a subirse «a terrazas de los edificios desde donde, con piedras, siguieron hostigando a la Policía Armada».⁹⁶ Nuevas cargas policiales fueron rompiendo progresivamente el frente de los manifestantes, que tendieron a disgregarse por calles adyacentes en el centro de la ciudad, hecho que facilitó la labor represiva de grupos de trabajadores aislados.

Uno de los manifestantes era Juan Gabriel Rodrigo Knafo. Hijo de un exiliado político, el joven de diecinueve años trabajaba como peón de la construcción en la Refinería Enpetrol en la empresa Duro Falguera y aquel día había marchado junto a su cuñado y el resto de sus compañeros de trabajo en solidaridad con sus hermanos de clase abatidos en Vitoria.⁹⁷ Sobre las cinco de la tarde se produjeron nuevas cargas policiales que dispersaron los grupos reunidos en la calle Hospital,

⁹³ AGA, MIT, caja 42, legajo 9112, carpeta 14, anexo a la nota de Europa Press del 5 de marzo de 1976.

⁹⁴ «Nota del Gobierno Civil», *Diario Español*, 6 de marzo de 1976.

⁹⁵ AGA, MIT, caja 42, legajo 9112, carpeta 14, anexo a la nota de Europa Press del 5 de marzo de 1976.

⁹⁶ «Nota del Gobierno Civil», *Diario Español*, 6 de marzo de 1976.

⁹⁷ Sobre Juan G. Rodrigo y los detalles de su muerte, véase D. Ballester: *Vides truncades. Repressió, víctimes i impunitat a Catalunya (1964-1980)*, PUV, Valencia, 2018, pp. 88-101.

entre los que se hallaba el propio Rodrigo. Tras su muerte, el Gobierno Civil informó que Rodrigo se encontraba apostado en una terraza de Hermanos Landa lanzando piedras sobre los efectivos policiales mientras éstos actuaban en la Rambla Nova, pese que dese ahí carecía de ángulo para hacerlo. Con toda seguridad, Rodrigo había huido desde la calle Hospital, cruzando la Rambla Nova hacia Hermanos Landa. A la altura del número 7 debió encontrar el portal abierto y entró en busca de refugio. Se sabe que fue seguido por al menos un policía y que ambos subieron hasta la azotea, aunque sólo uno bajó con vida.⁹⁸

Las agencias informativas extranjeras vincularon lo ocurrido en Tarragona al contexto general de contestación contra el gobierno de la monarquía y a los intentos de perpetuar el franquismo sin Franco. «La violencia política se cobró hoy otra víctima al fallecer un hombre en la ciudad mediterránea de Tarragona a consecuencia de las heridas sufridas durante una manifestación callejera», informaba United Press International. Destacaban que la muerte se produjo durante «una manifestación por las calles de Tarragona, ayer, para protestar por la acción de la policía en la ciudad vasca de Vitoria, en la que tres obreros resultaron muertos a primeros de esta semana en los peores disturbios políticos de la era post-Franco». Por su parte, el «Gobierno del Rey Juan Carlos declaró ayer que está determinado a mantener el orden público frente a los *intentos subversivos* de provocar la violencia política en España».⁹⁹

Nada como lo ocurrido el 5 de marzo se había dado con anterioridad en Tarragona. Era la primera vez que un manifestante caía muerto en el transcurso de una protesta contra el régimen, de una forma u otra, producto de la acción de las fuerzas policiales. Las protestas de aquella jornada se alargaron hasta pasadas las ocho de la noche, en un marco en que todas las fuentes describen como una auténtica batalla campal, en el que la fuerza pública sólo logró restablecer «el orden mediante el empleo de botes de humo y proyectiles de goma, mientras los piquetes producían diversos destrozos en la zona céntrica de la ciudad y lanzaban piedras contra los efectivos policiales».¹⁰⁰ Nunca antes había sido necesaria tal dosis de violencia por parte de la policía; nunca antes el movimiento obrero y el antifranquismo en general había forzado hasta aquel punto su pulso callejero contra la dictadura.

La identidad del manifestante malherido no trascendió a los medios de comunicación. Los médicos certificaron su defunción poco después de las tres de la madrugada, pero las autoridades tarraconenses se cercioraron que ningún medio pudiera publicar la noticia el día siguiente de los hechos. Anticipándose a posibles repercusiones sociales, las autoridades civiles no proporcionaron ningún detalle de lo sucedido. No fue hasta el domingo al medio día que trascendió la identidad del fallecido

⁹⁸ He presentado mis dudas razonables sobre los hechos en C. Ferrer González: *Sota...* cit., pp. 323 y ss.

⁹⁹ AGA, MIT, caja 42, legajo 9112, carpeta 14, «Visión informativa de agencias extranjeras», Difusión Informativa de la Dirección General de Coordinación, turno de 9 a 15 horas, 6 de marzo de 1976, p. 23.

¹⁰⁰ AGA, MIT, caja 42, legajo 9112, carpeta 14, anexo a la nota de Europa Pres del 5 de marzo de 1976.

y a circular detalles sobre su entierro. Pese a aquellos impedimentos, la autoridad civil no impidió que la inhumación de Juan Rodrigo se convirtiera en una concurrida muestra de duelo de los antifranquistas de la ciudad y comarca. La Asamblea de Tarragona medió con el arzobispo Josep Pont i Gol para que el oficio fúnebre se pudiera realizar en la iglesia de Sant Francesc, un centro con capacidad suficiente para acoger al cerca de un millar de personas que acudieron al acto.¹⁰¹

Tras finalizar el oficio religioso, mosén Rué leyó un comunicado de la Asamblea de Tarragona, en el que el organismo antifranquista se reafirmaba en su voluntad de alejarse de actuaciones violentas, que motivaron críticas de algunos de sus integrantes.¹⁰² El traslado de Rodrigo hasta el cementerio se convirtió en una gran manifestación popular, tal como se pudo verse en la fotografía del momento que ilustró la portada del número 223 del semanario *Cambio 16*, bajo el titular «Semana trágica». Siguiendo la estética inaugurada por la revolución portuguesa de dos años antes, algunos manifestantes portaban «claveles rojos [que] revolotearon al final del trayecto en señal de una última solidaridad, mientras eran coreados vivas a la clase obrera, a la libertad y, más aisladamente, a la Asamblea de Cataluña».¹⁰³

Los congregados hicieron circular diversas huchas para recoger dinero con el que sufragar los gastos del entierro y ayudar a la familia en aquellos momentos difíciles. Sin embargo, Rodrigo sería sepultado en un nicho que Maria Lluïsa Malé Carbó, procedente de una familia acaudalada de la ciudad y desposada con el abogado antifranquista Rafael Nadal, militante del PSUC, había adquirido el día anterior.¹⁰⁴ La marcha prosiguió tras el sepelio con una nueva marcha hasta el centro de la ciudad. El silencio del que se hizo gala en las inmediaciones del cementerio se fue apagando para dar paso a gritos y consignas de indignación en las que se emitieron cánticos contra la policía y la represión. Los gritos de los militantes de la izquierda radical, a los que se sumaron unos pocos militantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), recién constituido en la ciudad, contrastaba con el evidente malestar de los militantes del PSUC, que llegaron a ser increpados por algunos manifestantes.¹⁰⁵ Al llegar al Balcón del Mediterráneo, en el extremo este de la Rambla Nova, la Policía Armada hizo acto de presencia con diversos jeeps, pero los pocos centenares de manifestantes que llegaron hasta ahí se disolvieron antes de la que éstos llegaron a intervenir.¹⁰⁶

¹⁰¹ R. Nadal: *Més de mig segle en el torn d'ofici i altres records*, Mèdol, Tarragona, 1996, pp. 321-322.

¹⁰² «Funeral por el manifestante fallecido», *Diario Español*, 9 de marzo de 1976. Las críticas provinieron sobretodo del PTE, pero el PSOE también se sumó a ellas, véase C. Ferrer González: *Sota...* op. cit., pp. 330 y ss.

¹⁰³ «Muerte oscura», *Cambio 16*, n.º. 223, 15-21 de marzo de 1976.

¹⁰⁴ R. Nadal: op. cit., p. 269.

¹⁰⁵ Entrevista a Josep Sánchez Cervelló, 20 de junio de 2016.

¹⁰⁶ «Funeral por el manifestante fallecido», *Diario Español*, 9 de marzo de 1976.

BALANCE Y CONSIDERACIONES EN TORNO AL PULSO DE 1976

Unas crecientemente deslegitimadas autoridades provinciales se esforzaron a vincular lo sucedido durante los últimos meses en Tarragona con «lo de Vitoria», tal como lo denominaba el *Diario Español*. Es decir, que «[q]uince mil hombres en huelga» puedan «amedrentar a treinta millones de hombres que trabajan». Para los aparatos provinciales del régimen era legítimo el uso de cuantos medios fueran necesarios en contextos como aquellos, incluida la fuerza: «cuanto es preciso para evitar a nuestro país jornadas como la de Vitoria», como las que, de hecho, se estaban produciendo en Tarragona el día de la salida del rotativo. Una y otra vez reaparecía la idea que lo fundamental era la conservación del orden de los vencedores de la Guerra Civil, un orden que había sentado las bases de la *convivencia*: «No puede permitirse que fuerzas empeñadas en la destrucción de lo que hoy es España, declaren una guerra de desgaste en la que los perdedores serían los propios españoles».¹⁰⁷

Los fantasmas del desorden y el caos volvían a agitarse entonces, tantos años después de derrotada militarmente la Segunda República. Según el ministro de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa, en «Vitoria se venía produciendo, desde primeros de año, una situación muy seria de desobediencia civil generalizada y de fervor casi prerrevolucionario, en medio de la inhibición de la autoridad gubernativa y con el pretexto de unas determinadas reivindicaciones laborales». Bajo un «régimen de asamblearismo permanente», afirmaba, los trabajadores había pretendido resolver «el tema de la amnistía o del restablecimiento de unas libertades que el país, en su conjunto, recuperaba por su trámite legítimo».¹⁰⁸ Era la suya una impresión superlativa a todas luces ajena a la realidad que pretendía justificar, a posteriori, el uso de la fuerza ante el supuesto riesgo de desborde «revolucionario», para con el orden y la propiedad, que conllevaba la pulsión por la ruptura democrática. Para los reformistas, lo que ellos denominaban democracia debía ser establecida sin sobresaltos y, más importante aún, sin contar con la intervención del antifranquismo en el proceso de cambio.¹⁰⁹ Para ello era imprescindible evitar «lo de Vitoria», esto es, la participación obrera y popular en las cuestiones políticas; y, menos aún, que la presión desde abajo marcara la agenda pública. Tal como hizo explícito el ministro de Gobernación en sus memorias, a primeros de 1976 había «mucha gente dispuesta a jugar con esto», es decir, a disputarle al régimen el control del orden público, con el fin de incidir sobre el cambio político, «del modo más frívolamente e irresponsable». «El orden fue mantenido, y, si se tienen en cuenta las circunstancias, a un coste razonable; después del 1 de mayo todo el mundo iba a saber que el serio intento que algunos habían

¹⁰⁷ «Lo de Vitoria», *Diario Español*, 5 de marzo de 1976.

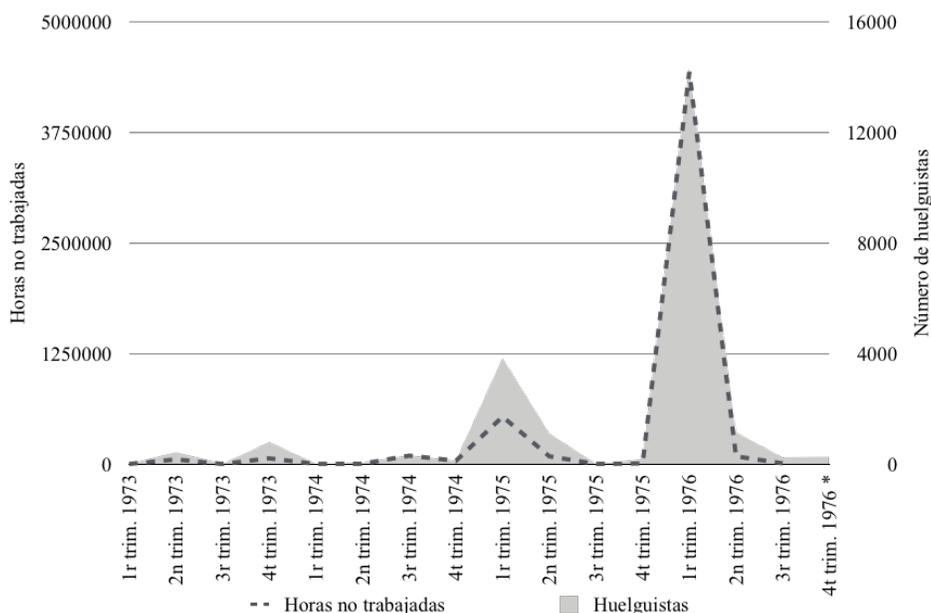
¹⁰⁸ R. Martín Villa: *Al servicio del Estado*, Planeta, Barcelona, 1984, pp. 26-27.

¹⁰⁹ R. Vega: «Demócratas sobrevenidos y razón de Estado. La transición desde el poder», *Historia del Presente*, 12 (2008), pp. 129-154.

realizado de volcar el carro y de crear las condiciones para un Gobierno provisional, del tipo de abril de 1931, no podría tener éxito».¹¹⁰

La Asamblea de Tarragona, por su parte, leyó los trágicos acontecimientos como un intento del franquismo de retrotraer a la población a «los tiempos del miedo» y se ratificaba en «su deseo de que la ruptura democrática se produzca de forma pacífica». La AC en Tarragona instó a realizar muestras públicas «de duelo y protesta por el nuevo crimen, que se ha de concretar a partir del lunes en asambleas y paros en los lugares de trabajo y de estudios y en manifestaciones».¹¹¹ Sin embargo, lo sucedido a partir de entonces jugó en contra de las propias expectativas del organismo unitario. Tras los violentos sucesos del 5 de marzo en Tarragona la conflictividad laboral cayó en picado, descendiendo de unos 15.000 huelguistas del primer trimestre —datos oficiales— a poco más de 1.000 para el segundo. Suponía una caída del 93%. Eran, sin embargo, niveles de conflicto sólo superados por el primer trimestre de 1975, el máximo histórico hasta la fecha, tal como puede apreciarse en el Gráfico 1.

Gráfico 1: Conflictividad laboral por trimestres, 1973-1976



Fuente: Elaboración propia a partir de datos recopilados por la OSE, AHPT, CNS, cajas 341-B, 342-344 y 352.

* No incluye la huelga general del 12 de noviembre.

¹¹⁰ M. Fraga Iribarne: *En busca del tiempo servido*, Planeta, Barcelona, 1987, p. 29.

¹¹¹ Llamamiento de la Asamblea de Tarragona, 7 de marzo de 1976, recogido en P. Heras: op. cit., p. 160.

Tanto a nivel general como local, empezaban a hacerse patentes algunos de los límites que una estrategia fundamentada en la movilización social conllevaba. Santiago Carrillo ya había advertido a la muerte de Franco que los comunistas en el movimiento obrero debían procurar auspiciar los fines democráticos, necesitados de amplias alianzas, y no aislarse del resto del movimiento antifranquista, cuyos objetivos máximos no eran análogos a largo plazo: «que no nos aislen, [...] que [las movilizaciones] no den miedo a sectores que tienen que ser nuestros aliados». ¹¹² Sin embargo, si bien parecía que los desasosiegos del secretario general de los comunistas eran en buena medida infundados, no lo eran en el otro extremo de la pirámide social, entre la clase trabajadora. El movimiento obrero, que había alcanzado sus mayores logros cuando había conseguido desbordar los mecanismos de contención del régimen, se reveló entonces como el único agente, junto a los estudiantes, que contaba con fuerza suficiente para disputar, de manera más o menos sostenida, el control del espacio público a la dictadura. Una capacidad de movilización que, aunque elevada, no podía pensarse en mantener de manera permanente y menos aún cuando la conflictividad en la calle era respondida con tal dosis de violencia policial que, además, recaía mayoritariamente sobre los trabajadores movilizadas. Cuando las fuerzas antifranquistas sellaron su unidad con la constitución de Coordinación Democrática, auspiciada por el rechazo a la violencia policial de marzo de 1976, lo primero a lo que tuvieron que hacer frente fue precisamente al agotamiento patente de su propia estrategia política basada en la extensión de las movilizaciones sociales por todo el país. ¹¹³ Y aunque las movilizaciones jamás desaparecerían del repertorio de acción antifranquista, la experiencia de primeros de año sí obligó a replantearlas, con el fin de que éstas no quedaran aisladas en sus principales bastiones y, radicalizadas por ese mismo aislamiento, pudieran entorpecer el avance de las posiciones democráticas. Y aunque la dinámica conflictiva de primeros de 1976 había llevado a imaginar que la Acción Democrática Nacional era viable, a medida que el ciclo de conflictos se iba cerrando con avances de las posiciones obreras en todos aquellos lugares donde se plantearon acciones de envergadura, aunque sin mejoras notorias en el plano político, ¹¹⁴ se impuso la necesidad de plantear nuevas fórmulas de movilización para una lucha política eficaz que presionara al poder estatal.

El régimen franquista padeció en aquel periodo un desgaste sin precedentes. Aunque la oposición daba muestras de cierto agotamiento estratégico —que se

¹¹² AHPCE, Fondo Dirigentes, Santiago Carrillo, caja 6, carpeta 2/2, «Reunión del Comité Ejecutivo con los camaradas del movimiento obrero», 3 de octubre al 2 de noviembre de 1975.

¹¹³ Editorial, «Unitat, unitat, unitat», *Lluita. Órgano del Comité Local de Tarragona del PSUC*, n.º. 21, abril de 1976.

¹¹⁴ Véase una breve panorámica en X. Domènech: *Quan el carrer...* cit., pp. 325 y ss.

tradujo en la nueva formulación de ruptura-pactada—¹¹⁵ el pulso político del antifranquismo logró extenderse por gran parte del territorio, incorporando a nuevos sectores sociales escasamente movilizados y alimentando expectativas que la misma movilización auspiciaba. El desgaste político y la deslegitimación social del régimen se tradujo en dimisiones, destituciones y maniobras de distinta naturaleza en el seno de la clase dirigente que evidenciaban la profunda crisis de la dictadura. Erancada vez más los franquistas que se daban cuenta que una reforma del régimen sin contar con el concurso de la oposición, al menos de una parte de ella, era del todo inviable. Un escenario inédito por completo y que fue, de hecho, el máximo logro del antifranquismo, al conseguir que el régimen se moviera al calor de los acontecimientos. De hecho, si algo había cambiado definitivamente en aquella etapa era que la dictadura tuvo que normalizar el conflicto político y asumir que la oposición era preeminente en el espacio público. Las manifestaciones convocadas por la Asamblea de Tarragona se sucedían pese a la negativa gubernativa a autorizarlas y la represión hacía acto de presencia con cada nueva convocatoria.¹¹⁶

Es cierto que el régimen logró resistir el embate del antifranquismo, esto es, consiguió abortar la ruptura democrática, pues los aparatos coercitivos del Estado se mantuvieron incólumes a pesar de la crisis del régimen. Pero su incapacidad por articular una alternativa política a sí mismo le impedía afrontar los retos que atravesaba el país. En ese escenario se produjeron numerosas «rupturas» de distinto calado, algunas de las cuales antecedieron a la caída del primer gobierno de la monarquía presidido por Carlos Arias Navarro. Unas «rupturas» que, al fin y al cabo, marcarían la primera etapa del cambio político, la que abortó las pretensiones continuistas. Incluso en Tarragona, donde no hubo fuerza suficiente para materializar una huelga general ciudadana como en tantas otras geografías, las consecuencias políticas de la acción sin precedentes del antifranquismo tarracónense de primeros de año fueron notables.

El 25 de marzo el concejal franquista Agustín Rosell Saurina puso a votación en el pleno de la corporación municipal un texto para que el ayuntamiento de Tarragona se adhiriera a los puntos de la AC, un documento que llevaba la firma de otros dos concejales tarracónenses. Una proposición que se aprobó por unani-

¹¹⁵ Las exigencias de la oposición se redujeron a pedir la legalización de todos los partidos, la amnistía, el restablecimiento de las libertades y la apertura de un proceso constituyente tras unas elecciones libres. Por el camino desaparecieron la apuesta por un gobierno provisional de concentración antifranquista, la alusión a la acción de masas para acabar con la dictadura y se dejaba la puerta abierta a una posible negociación con el gobierno de la monarquía si éste daba muestras claras de voluntad democrática. Véase J. Andrade: *El PCE y el PSOE en (la) transición. La evolución ideológica de la izquierda durante el proceso de cambio político*, Siglo XXI, Madrid, 2012, p. 64. Al mismo tiempo, el PSUC en Tarragona difundía «Sobre la “ruptura-pactada”», *Lluita*, n.º. 21, abril de 1976.

¹¹⁶ «Tarragona: el Gobierno Civil no autoriza una manifestación», *La Vanguardia Española*, 13 de marzo de 1976; «Las 3 jornadas de lucha de la asamblea», *Lluita*, n.º. 21, abril de 1976.

midad. La noticia había trascendido antes de que se celebrase la sesión en el consistorio, hecho que propició que éste se llenase como nunca antes: «no se recuerda en Tarragona un pleno con tanta asistencia de público y con tales vivas muestras de adhesión a una moción de los concejales». ¹¹⁷ La Asamblea de Tarragona celebró la noticia, emitiendo un comunicado en el que invitaba al alcalde Esteban Banús «y a los concejales para que participen en los actos y en las acciones democráticas que desarrollarán durante los días 2, 3, 4 y 5 de abril». ¹¹⁸ No lo hicieron.

La actuación del pleno municipal costó la destitución del Gobernador Civil, Antonio Aigé Pascual, durante cuyo mandato creció a ritmo equivalente la contestación social y la violencia política contra el movimiento obrero. Su nefasta gestión de los hechos de marzo, que propició diversas movilizaciones en solidaridad en otros puntos del país, ¹¹⁹ le puso en el punto de mira de Gobernación; un vaso que hizo colmar la gota de su permisividad ante la convocatoria del pleno del 25 de marzo, en el que se reclamaba una amnistía que iba a la línea de flotación del régimen. Sólo desde la perspectiva de la voluntad gubernamental por ejercer el control coercitivo del orden público —ya fuera a través de las fuerzas policiales o por medio de la violencia ultraderechista— puede comprenderse el nombramiento de Agustín Castejón Roy como nuevo gobernador civil de Tarragona. Hombre de principios joseantonianos y de simpatías ultras, Castejón había hecho carrera política en el Frente de Juventudes y el de Tarragona era el primer —último— cargo de gobernador civil que ostentaría. ¹²⁰

Con su nombramiento, el ministerio de Gobernación demostraba estar más preocupado por garantizar la unidad de la clase política entorno al ejecutivo que en los planes de reforma presuntamente democratizadores. La primera medida en el cargo de Castejón fue obligar a la corporación municipal a aprobar una nueva

¹¹⁷ «El Ayuntamiento de Tarragona pide el Estatut de 1932», *El Correo Catalán*, 27 de marzo de 1976. El PSUC leyó el hecho como un nítido avance de las posiciones democráticas y de las posibilidades de ir hacia una ruptura-pactada, véase «L'Ajuntament de Tarragona pels 4 punts», *Treball*, n.º. 438, 29 de marzo de 1976.

¹¹⁸ «La delegación de la Asamblea de Catalunya muestra su satisfacción», *El Correo Catalán*, 29 de marzo de 1976.

¹¹⁹ «Autorizada una expresión de duelo por lo sucesos de Elda, Vitoria y Tarragona», *Abc*, 11 de marzo de 1976; «Mataró: mañana, concentración pacífica autorizada por la Alcaldía», *La Vanguardia Española*, 11 de marzo de 1976. En la edición del día siguiente se leía: «Estudiantes de Pedralbes y de la Universidad Central, en número superior a mil, protagonizaron dos manifestaciones de protesta por los incidentes de Vitoria, Tarragona y Elda», en *Abc*, 12 de marzo de 1976. «Incidentes en la Zona Universitaria», *La Vanguardia Española*, 13 de marzo de 1976.

¹²⁰ Hay una breve semblanza biográfica de Castejón en J. Calvet y O. Luján: *Poble català, posa't a caminar. 40 anys de la Marxa de la Llibertat*, Angle, Barcelona, 2016, pp. 77-78. Durante diez meses ejercería con mano de hierro como Gobernador Civil en Tarragona. Tras su salida, en febrero de 1977, diversos individuos de extrema derecha llevarían a cabo el intento de incendiar el edificio del gobierno civil con el fin de imputarlo a la oposición. Posteriormente, Castejón llegaría a ser vicepresidente primero de la Fundación Nacional Francisco Franco. Véase C. Ferrer González: *Sota...* cit., pp. 349-350.

declaración en sentido contrario a la del 25 de marzo, que, sin embargo, ya no contó con los tres concejales proponentes de la primera. De hecho, éstos ya no volverían a reincorporarse a las tareas municipales y el ayuntamiento, totalmente deslegitimado, paralizaría su vida política hasta que, con las elecciones de 1977, se formara una comisión de control de mayoría socialista y comunista que fiscalizaría las medidas adoptadas por la corporación hasta las primeras elecciones municipales democráticas de 1979.

Después de todo lo expuesto, no puede sostenerse que el régimen transitara al margen del contexto de conflictividad socio-política en sus últimos años. Una conflictividad que no se limitó a unos pocos entornos geográficos, sino que adquirió relevancia política también en medios con menores recursos organizativos y fuerza acumulada. El caso de Tarragona demuestra que en provincias secundarias en términos de movilización social también se desarrollaron modelos de oposición que adquirirían una nítida dimensión política, al hacer evidente el desgaste de la clase dirigente y hacer que una parte de ella asumiera que la hoja de ruta la marcaba el antifranquismo. Fueron, sin duda, avances que facilitaron el proceso de un cambio político en el sentido democratizador a nivel general. Pero, al mismo tiempo, eran el reflejo local de los caminos que el antifranquismo con mayor capacidad de incidencia política habían abierto. Una situación que no era más que la expresión de los signos de la hegemonía social que la oposición y su densa red social formada por partidos, asociaciones o entidades civiles, habían adquirido en Catalunya. Una hegemonía social que fue mucho más allá de sus principales enclaves en la Gran Barcelona y que brindó oportunidades políticas en los espacios periféricos que fueron ampliamente aprovechadas por los opositores locales para enfrentarse a los representantes de la dictadura en sus entornos más inmediatos.